

I. SISTEMA POLÍTICO

1. Antecedentes históricos

Después de conseguir su independencia, Costa Rica encontró la senda del orden y el progreso con menos dificultades que otros países centroamericanos: la formación del Estado nacional y las reformas liberales aseguraron el orden; la siembra y la exportación del café aportaron el progreso. A finales del siglo XIX, los ferrocarriles y el plátano también llegaron en nombre del progreso, pero enseguida se hizo evidente el peligro que ambos entrañaban para la soberanía. En síntesis, la sociedad costarricense ligó su destino a una economía de monocultivo y agroexportadora, estrechamente vinculada al mercado mundial.

El cultivo del café significó un cambio en el sistema económico y social, y tanto la oligarquía como el resto de la población incrementaron sus recursos materiales en forma notable en torno a esa actividad. No se trató de que por primera vez en la historia del país surgiera una élite. Más bien, antiguas y nuevas fortunas se unieron alrededor de un proceso exportador que además de ofrecer ciertas comodidades representaba el tránsito hacia una agricultura comercial, hasta quedar consolidadas como un grupo diferenciado que se separaba cada vez más del agricultor promedio, aun cuando los patrones de distribución de la riqueza no hubieran cambiado drásticamente. Ciertamente es que para una rápida transición hacia el cultivo cafetalero era necesario determinado nivel previo de concentración de la riqueza, ya que las primeras ganancias se obtenían hasta después de transcurridos entre tres y cinco años de la siembra, y sólo quienes poseían algún excedente de fuerza de trabajo dentro de su propiedad o contaban con el capital

necesario para pagar salarios podían aprovechar las nuevas ventajas que ofrecía el grano.

Por mínimo que fuera el monto del capital que se necesitaba invertir para iniciar la producción del café, era suficientemente alto como para asegurar que los primeros plantadores surgieran de un sector con recursos y que la tierra por sí sola no garantizara el ingreso al exclusivo círculo formado por los “barones del café”. En consecuencia, los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar a mediados del siglo pasado se caracterizaron por tres elementos básicos: la existencia previa de una élite, enriquecida y redefinida pero no creada por el café; un avance material considerable que permitió la clara consolidación de la élite y su separación social, y el mantenimiento, e incluso fortalecimiento, de la pequeña propiedad.

Si bien la oligarquía cafetalera se había separado en términos económicos y sociales del resto de la población, sus niveles de riqueza nunca llegaron a asemejarse a aquellos que poseían sus homólogos de otras naciones. Mientras que los costarricenses con mayores ingresos podían calcular sus ingresos cuando mucho en miles de pesos, su contraparte mexicana no contaba sus recursos en menos de cientos de miles o, incluso, millones de los mismos pesos. A pesar de todo, hubo cambios y el nivel de vida de los habitantes mejoró notablemente.

Además de esta élite, que incluía a unos cuantos, en la base de todo el funcionamiento social se encontraba el pequeño productor, relacionado antagónicamente con los “barones del café”. Los antagonismos y dicotomías entre “maicero-finquero”, en el nivel local, y “finquero-beneficiador”, en el plano nacional, constituyen la clave para entender el ciclo de producción del café durante el siglo XIX. Un nuevo sistema social, cuya dinámica se estableció y se desarrolló a partir de la contradicción básica entre el comerciante-procesador-financiero y el pequeño propietario, reemplazó al orden internamente distinto y mucho más pobre que se había venido desarrollando desde la etapa colonial.

Dado que el proceso de obtención de beneficios a través del grano adquirió un papel determinante en la estructuración de los distintos elementos sociales, es imprescindible analizar en qué consistía y de qué manera pudo influir en el desenvolvimiento del

país. De hecho, quizás una de las principales razones por las cuales Costa Rica consiguió mantener, sin esforzarse demasiado, sus mercados extranjeros y fuentes de crédito fue la extraordinaria calidad del café que producía.

En los primeros años de la industria cafetalera el número de beneficiarios no llegaba a 100,¹ y buena parte de ellos frecuentemente ocuparon posiciones políticas de relevancia en la naciente república, lo cual algunas veces los condujo a enfrentamientos partidarios. Con el tiempo, el pequeño grupo fue creciendo y al círculo inicial se sumaron algunos extranjeros, procedentes sobre todo de Europa que, después de comprar o construir un bien cafetalero, eran rápidamente aceptados y, además, a la larga se casaban con mujeres pertenecientes a familias distinguidas del país e incluso se naturalizaban como costarricenses. No fueron muchos los extranjeros que consiguieron formar parte de la oligarquía cafetalera; sin embargo, adquirieron gran importancia y hacia finales del siglo más del 20% de los procesos de beneficio y exportación estaba en sus manos.

La fuerza de la élite, como ya se ha mencionado, descansaba en el control sobre el procesamiento y comercialización del producto y no tanto en la propiedad de inmensas fincas; los beneficiadores no monopolizaban el cultivo del café. La posibilidad de sustituir a un inexistente sistema financiero con créditos procedentes de Europa constituyó otra fuente de poder para este grupo. En realidad, cuando a mediados del siglo XIX se inició la expansión cafetalera, el país prácticamente no tenía los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades generadas por la nueva industria: Costa Rica carecía de bancos y la moneda nacional (el peso) circulaba en forma limitada. Las actividades internas, por su parte, como podría ser la minería, produjeron tan escaso capital que todavía está por demostrarse si permitieron algún tipo de acumulación.

En estas condiciones fue necesario recurrir a los futuros compradores para obtener algún tipo de crédito, por lo que se instauró el llamado sistema de adelantos, que consistía en el pago de la cosecha con varios meses de anticipación a su venta en el viejo continente. Quienes monopolizaban dichos recursos eran los

¹ Diana Guillén, *Costa Rica, una historia breve*, Alianza Editorial, México, 1988, p. 78.

beneficiadores y exportadores, quienes después de recibir la suma adelantada de las casas importadoras europeas proveían a su vez el crédito necesario a los pequeños productores. El campesino quedaba así sujeto al beneficiador a través de un contrato en el que se comprometía, varios meses antes de que empezara la cosecha, a entregar un número determinado de fanegas a cambio del dinero recibido como adelanto.

Debe destacarse que el café brindó a Costa Rica la posibilidad de introducirse en el mercado mundial y se convirtió en el único producto de exportación con el que virtualmente contó el país entre 1840 y 1890.

Al tiempo que el café establecía sus fueros dentro de la economía costarricense del siglo XIX, los miembros del pequeño grupo que controlaba su beneficio y comercialización se acercaban al poder. El camino lo facilitó Braulio Carrillo, quien después de dar un golpe de Estado accedió por segunda vez al poder en 1838, favoreció de lleno los intereses cafetaleros e instauró un estilo de gobierno prácticamente dictatorial y altamente personalista que, además de tender a la sistematización y racionalización de la administración pública, puso los cimientos sobre los que se consolidaría el ascenso político del sector relacionado con el grano.

Un aspecto interesante a considerar durante el periodo carrillista es su relación con el establecimiento de la soberanía nacional. Cuando Carrillo asumió por segunda vez la Presidencia, Costa Rica formaba parte de la República Federal Centroamericana, y si bien siempre mantuvo una gran autonomía con respecto a sus vecinos y siguió una trayectoria propia en la que los problemas regionales no tenían mayor incidencia, en el plano formal continuaba siendo parte de la federación centroamericana.

El intento de reunir a las provincias que antiguamente habían integrado la capitanía de Guatemala se mostraba ya para entonces como un sueño difícil de alcanzar. Además, la introducción de ideas de corte liberal y su aceptación por parte de algunos sectores se sumó a las divergencias ya existentes, para finalmente conformar las dos grandes facciones políticas que se enfrentaron en esta etapa: liberales de un lado, y conservadores o “serviles” del otro. Más allá del nivel discursivo, los límites que los separaban eran difusos y las

filiaciones a una u otra facción se hacían a partir de criterios muy frágiles, que a la larga llevarían a frecuentes cambios de bando.

Una vez rotos los lazos que unían a Costa Rica con la República Federal, el país vivió un periodo de convulsiones internas, a lo largo del cual los cambios de gobierno estuvieron determinados por la violencia. Carrillo y Francisco Morazán, líder liberal centroamericano, habían llegado a la Presidencia por medio de las armas y por la misma vía fueron derrocados. A partir de entonces, la milicia se convirtió en un instrumento del sector cafetalero mediante el cual lograba imponer a los jefes de Estado más convenientes para sus intereses, y de esta forma mantenía el control sobre los hilos de la política. Sin embargo, el militarismo que caracterizó la política nacional hasta 1870 no condujo al establecimiento de gobiernos militares pues, cuando bajo la amenaza de las armas los gobernantes se veían obligados a abandonar la Presidencia, eran presidentes civiles, ligados a la producción y exportación de café, quienes asumían el control del aparato estatal.

Paradójicamente, correspondió al primer militar de carrera que ocupó la Presidencia, sin considerar a Morazán, el mérito de haber terminado con la utilización de medios violentos para resolver el problema de la sucesión presidencial. En efecto, fue el general Tomás Guardia quien, durante los 12 años en los que mantuvo el poder, concretó las bases materiales y políticas que darían sustento a las reformas emprendidas durante la década siguiente.

La llamada República Liberal se instauró en Costa Rica en 1882, año en que falleció el general Tomás Guardia y Próspero Fernández ocupó la Presidencia. Es importante señalar que la labor realizada por Guardia preparó el camino para que el credo liberal y republicano se consolidara, al fortalecer y centralizar el gobierno alrededor de un jefe militar, a lo largo de poco más de una década. Aparentemente contradictorio con respecto a las doctrinas liberales, este proceso fue el que en gran medida permitió que las mismas se impusieran sobre el modelo basado en la fuerza de las armas, que había marcado la vida del país por varios años. El régimen dictatorial impuesto por el general Guardia sofocó conspiraciones y rebeliones de otros militares, de familias políticas o, incluso, de camarillas oligárquicas inconformes, y destruyó así la posibilidad de mantener el militarismo.

Si bien Guardia fue una figura netamente agresiva, que recurrió a la fuerza para conseguir y desplegar su poder, que apuntaló el presupuesto y el aparato de guerra, que llegó a dominar a cerca de 20 mil soldados y que consiguió la absoluta fidelidad de comandantes y oficiales, su gobierno fue el que puso fin al predominio adquirido por los militares en la etapa anterior y abrió las puertas de la política a nuevas alternativas y proyectos.

En los últimos años del siglo XIX se registró una serie de reformas influidas por los conceptos liberales, que tuvieron repercusiones en los distintos campos de la vida nacional. Este proceso no se redujo a Costa Rica, sino que formó parte de un movimiento que se extendió por toda América Latina. Cada uno de los países del área, a partir de un modelo político de democracia constitucional importado de Europa y Estados Unidos, dio forma y especificidad, de acuerdo a su propia trayectoria histórica, al proceso conocido como Reforma Liberal, cuyo objetivo era modernizar las estructuras locales.

En Costa Rica el liberalismo se impuso sin la violencia que implicó su instauración en otras partes del continente, y si bien fue a partir de la década de los ochenta del siglo XIX cuando adquirió mayor fuerza, se pueden encontrar medidas de corte liberal en etapas anteriores, como por ejemplo, la abolición del diezmo, la subordinación del clero al poder estatal y la distribución gratuita de terrenos baldíos para dedicarlos a la producción agrícola.

Entre 1824 y 1958 nueve administraciones recurrieron a la violencia para alcanzar la primera magistratura del país, otras nueve llegaron por legítima designación y por cortos periodos, 19 por medio de elecciones fundamentalmente carentes de oposición y nueve más por elecciones con oposición (cuatro indirectas y cinco directas). Como se observa, la violencia abierta ha jugado un papel secundario en la tradición seguida por los regímenes costarricenses. Este hecho se ve confirmado en el presente siglo, a lo largo del cual sólo durante dos periodos se ha utilizado el recurso de las armas para cambiar de gobernante: de 1917 a 1919 y de 1948 a 1949. En otras palabras, parecería que el modelo de democracia liberal, con todas las ventajas y limitaciones que le son inherentes, ha conseguido cierto grado de desarrollo en Costa Rica, que resalta aún más si se le compara con la tradición política que

ha imperado en el resto de Latinoamérica, y muy particularmente en la región centroamericana.

En síntesis, la idea de que una peculiar cultura política se ha desarrollado en Costa Rica tiene sus bases más profundas en el siglo XIX, aunque buena parte de su actual dimensión la adquirió sólo después de la revolución que en 1948 estableció nuevas reglas para el juego político.

Por otro lado, para Costa Rica 1899 no sólo marcó el último año de una centuria trascendental para la vida del país, sino que remite a un hecho esencial para su historia: el nacimiento del enclave bananero representado por la United Fruit Company. Antes de que el plátano apareciera en escena, la economía, la política y la sociedad costarricenses giraban alrededor del café, por lo que el surgimiento de un nuevo producto de exportación significó dejar atrás toda una época.

El desarrollo de la producción bananera estuvo indisolublemente ligado a la construcción del ferrocarril al Atlántico, que había constituido un viejo anhelo de aquellos gobernantes y cafetaleros que veían en él la posibilidad de reducir los costos implicados en la transportación del grano hacia el mercado europeo.

La firma del contrato entre el presidente Bernardo Soto y el estadounidense Minor Cooper Keith dio a éste la administración del ferrocarril durante 99 años y le otorgó 800,000 acres de tierras baldías y dos lotes en el pueblo de Limón. Por su parte, el empresario se comprometió a terminar la línea ferroviaria entre San José y Limón, a liquidar la deuda externa que el país había adquirido desde 1871 para iniciar la construcción de la vía férrea, y también a reunir mediante la venta de bonos, de los que él y no el gobierno sería responsable, el dinero necesario para concluir la obra. Las generosas concesiones que le entregó el gobierno permitieron a Cooper Keith establecer las bases de un imperio bananero que terminó por monopolizar el transporte y comercialización del fruto.

A principios del siglo XX, Costa Rica vivió una crisis económica ocasionada tanto por los elevados gastos para la construcción del ferrocarril como por el costo de las reformas monetarias del presidente Rafael Yglesias, que implicaron la eliminación del privilegio que se había otorgado al Banco de Costa Rica para la emisión de la moneda.

La “transacción” de 1901, que significó el ascenso de los liberales al poder en 1902, inició un largo periodo que llegó a su fin en 1940. Hubo, sin embargo, dos breves interrupciones: una, el gobierno de Alfredo González Flores, entre 1914 y 1917, que atacó de frente las ideas de los liberales; y otra, el régimen dictatorial de los hermanos Tinoco de 1917 a 1919. Fueron momentos en que se puso de manifiesto el brillo del régimen liberal y sus virtudes: libertades políticas, respeto a las formalidades de la ley, la civilidad y la tolerancia, pero igualmente aparecieron evidentes errores y limitaciones: olvido de los problemas sociales y lentitud administrativa para hacer frente a las nuevas situaciones en todos los órdenes de la vida nacional.

Ricardo Jiménez Oreamuno, liberal, que sería tres veces presidente de la República, llegó al gobierno por primera ocasión en 1910, levantando su candidatura con una efectiva campaña de tinte antiimperialista; en 1907, 1908 y 1909 pronunció en el Congreso una serie de notables discursos contra la United Fruit Company y la compañía inglesa del ferrocarril al Atlántico. En esta lucha tuvo el respaldo no sólo de los pequeños grupos de intelectuales y obreros que defendían con más fuerza los intereses nacionales, sino de los finqueros costarricenses que sembraban plátano para venderlo a la poderosa compañía estadounidense. Al presidente Jiménez le tocó dar un paso importante para consolidar el derecho al sufragio, proponiendo una reforma constitucional para establecer el voto directo.

Ése fue un buen periodo para la economía nacional: aumentaron en general las exportaciones, el café se cotizó a buenos precios, en 1911 se exportaron 11 millones de racimos de plátano, mejoraron los cultivos y la exportación del cacao. No obstante, ya en esos años era muy claro el fenómeno de la dependencia económica, los conflictos laborales ocurrían frecuentemente y el Estado sufría una crónica escasez de recursos.

En 1914 llegó una de las señaladas pausas en el largo predominio liberal. Por una inesperada combinación política ascendió a la Presidencia, para suceder a Ricardo Jiménez, Alfredo González Flores, político joven relativamente desconocido. Poco después de su ascenso estalló la guerra europea y Costa Rica hizo frente a problemas económicos insuperables: drástica reducción de los ingresos públi-

cos, pues los impuestos de aduana eran el renglón más importante; suspensión de los embarques de café a Inglaterra; empobrecimiento general en las ciudades y en los campos. González Flores era un político lleno de idealismo y un estadista serio, profundo conocedor de los asuntos económicos —en 1914 creó el Banco Internacional de Costa Rica. No era, sin embargo, un hombre de partidos políticos, cuestión que influyó en su deposición de la Presidencia por parte de los hermanos Cleto y Ricardo Tinoco, a través de un golpe de Estado.

En mayo de 1919 un grupo de exiliados invadió el territorio nacional desde Nicaragua, en un vano intento por derribar al régimen de los Tinoco, que sin embargo cayó tiempo después a manos de un movimiento de resistencia interna en el que participaron todos los ciudadanos. Treinta meses sufrió Costa Rica la experiencia de un gobierno dictatorial, cuyo mal recuerdo perdura todavía.

En 1928 se vivió un movimiento nacionalista dirigido contra la United Fruit Company, la Northern Railway Co., que operaba el ferrocarril al Atlántico, y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, filial de una poderosa empresa estadounidense. Empresarios costarricenses, profesionales, agricultores y obreros fundaron la Liga Cívica y emprendieron una gran campaña en defensa de los intereses nacionales. De esos esfuerzos surgió, ese mismo año, el Servicio Nacional de Electricidad, destinado a controlar el funcionamiento de las empresas privadas en este campo.

Una economía que parecía bien encaminada se arruinó completamente por la crisis de 1929, cuyas consecuencias se sentirían duramente por varios años. No es sorprendente, entonces, que en 1931 un grupo de jóvenes fundara el Partido Comunista, denunciando las injusticias sociales y ofreciendo la transformación completa de la sociedad costarricense.

Hacia 1940 pareció iniciarse un nuevo periodo en la evolución política del país. Prácticamente por unanimidad fue electo Rafael Ángel Calderón Guardia, quien afirmó en su campaña que se orientaría por la tesis del “cristianismo social”, encontrando no poca oposición. Una serie de decisiones y reformas a leyes relacionadas con la Iglesia terminaron por desprestigiar por completo el régimen de Calderón, por lo que los historiadores consideran su elección como la muerte oficial del liberalismo político en Costa Rica.

Mientras el país avanzaba en el campo social retrocedía, sin embargo, en el campo político, sobre todo en lo referente al derecho al sufragio. El ex presidente León Cortés empezó a dirigir un creciente movimiento de oposición, que en formas diversas fue atacado desde el poder público. En las elecciones de 1944, en medio de evidentes irregularidades electorales, ascendió a la Presidencia el candidato oficial Teodoro Picado. En 1943 se había disuelto formalmente el Partido Comunista, pero cambió de nombre y de programa y surgió a la vida política como Partido Vanguardia Popular, el cual, en alianza con el Partido Republicano Nacional, defendió la elección de Picado. En la oposición se rebelaba José Figueres, quien mantenía la tesis de que sólo por la fuerza se podía obligar al gobierno a respetar el resultado de las elecciones.

En 1947 se produjo una huelga de brazos caídos, durante tres semanas, que concluyó cuando el régimen concedió ciertas garantías electorales: un Tribunal Nacional Electoral con medios suficientes para cumplir sus tareas, la promesa de acatar “como definitiva e inapelable” la decisión del Tribunal sobre el resultado de las elecciones, y el compromiso del presidente y del ministro de Seguridad Pública de entregar el control de la fuerza pública al candidato vencedor 24 horas después de emitido el fallo del Tribunal Nacional Electoral.

El 8 de febrero de 1948 se celebraron elecciones presidenciales en las que resultó electo Otilio Ularte, candidato de oposición. Sin embargo, grupos simpatizantes del gobierno declararon nula la elección, por lo que Figueres se levantó en armas para exigir respeto por el resultado electoral.

Aunque el alzamiento armado se produjo para que se respetara el resultado electoral de febrero, el presidente electo y José Figueres suscribieron un pacto que estipuló que este último gobernaría el país durante un periodo transitorio de 18 meses, comprometiéndose a respetar el fallo del Tribunal Nacional Electoral y a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Una Junta de Gobierno presidida por Figueres gobernó Costa Rica durante el lapso convenido, pero sin Asamblea Legislativa. En ese periodo se dictó legislación de gran impacto para la vida nacional como la nacionalización de la banca, la disolución del ejército y la redacción de una nueva Constitución.

En las elecciones de diciembre de 1948 para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, los partidos que ganaron la guerra civil obtuvieron 38 de los 45 asientos. La Asamblea se instaló en enero de 1949 y concluyó sus labores el 7 de noviembre de ese año con la aprobación de una nueva Constitución política que contenía algunas novedades importantes, como la instauración del voto femenino y la consolidación del Tribunal Supremo de Elecciones, con plena autoridad en su campo.

Ya vigente la Constitución Política de 1949, dos fuertes bloques políticos se disputaron el poder desde entonces: uno, centrado en la personalidad e ideas del nuevo líder político José Figueres, y el otro constituido por grupos heterogéneos que se le oponían. No fue sino hasta las elecciones de 1986 que estas últimas fuerzas lograron formar una agrupación política con el nombre de Unidad Social Cristiana. Figueres, por su parte, organizó desde 1951 el Partido Liberación Nacional, que participó en todas las elecciones nacionales desde 1953, resultando electos sus candidatos a la Presidencia en 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986 y 1994.

El tercer sector político electoral ha sido el movimiento de la izquierda, que ha participado en todas las elecciones nacionales, a veces en un solo bloque y otras dividido en varios grupos. Aunque también han surgido y desaparecido otras organizaciones de difícil ubicación ideológica, entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana han obtenido más del 90% de los votos.

Desde 1948 se inició un proceso de crecimiento notable del Estado costarricense, visible sobre todo en los gobiernos de Liberación Nacional. Sectores de clase media se fortalecieron y ocuparon las principales posiciones en todos los ámbitos de la vida nacional, mientras que el sistema educativo se extendió hasta las zonas más alejadas del país, cubriendo todas las capas de la población.

La actividad sindical ha tenido plenas garantías para su desarrollo, pero se ha dividido en distintos grupos de diferente orientación ideológica; sus agrupaciones más fuertes se encuentran en el sector público. En la década de los setenta empezó a crecer con mucha fuerza el “Movimiento Solidarista”, en competencia con los sindicalistas en la búsqueda del apoyo de los trabajadores; en la región bananera del Atlántico obtuvo éxitos de consideración. También en esa época

adquirió importancia significativa el “Movimiento Cooperativo”, que desde entonces recibió fuerte ayuda del Estado; el cafetalero es uno de los sectores más relevantes de esta organización económica.

Hasta 1950 la economía era básicamente agroexportadora con base en el café y en el plátano. En esa década, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), empezó a concebirse la idea de que el país debía industrializarse como único medio de iniciar su desarrollo económico. En la década siguiente, reforzados los planes de la CEPAL con la política del presidente Kennedy que culminó en la Alianza para el Progreso, Costa Rica se adhirió al Tratado General de Integración Económica, ingresando al Mercado Común Centroamericano en 1963. Crecieron notablemente la producción industrial y el volumen del empleo, se consolidó un importante grupo gerencial surgido de la clase media y se diversificaron varios aspectos de la economía; sin embargo, los opositores destacaban los problemas sociales que se producían en este proceso, e insistían en el hecho de que las más importantes empresas estaban controladas por capital extranjero.

Es importante anotar que socialmente, a pesar de las medidas progresistas aprobadas después de 1948, el notable crecimiento produjo un fenómeno de concentración de la riqueza, acentuando las diferencias entre los sectores más pobres y un reducido grupo con ingresos excesivamente altos.

En las décadas de 1970 y 1980 Costa Rica no pudo sustraerse de las consecuencias de los conflictos sociales y políticos que se registraban en el resto de Centroamérica. En 1969, la guerra entre El Salvador y Honduras marcó el fin de la integración económica centroamericana, que ya desde años atrás enfrentaba muy serios problemas, y en 1979 la caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza inició otro periodo de conmociones. Costa Rica, que había apoyado en todas las formas posibles la lucha contra el régimen somocista, tuvo que hacer frente a múltiples conflictos con el nuevo gobierno sandinista. Del lado costarricense, el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986) proclamó la doctrina de la “neutralidad perpetua, activa y no armada” del país, y el presidente Oscar Arias (1986-1990) trabajó activamente para asegurar

la paz en el istmo centroamericano, por lo cual obtuvo en 1987 el Premio Nobel de la Paz.

La legitimidad del sistema político de Costa Rica no ha sufrido mengua alguna. Por el contrario, los gobiernos que surgieron después de 1948 no sólo han sido más eficaces en el manejo de la crisis económica, primero, y en la administración del Estado, después, sino que así fueron percibidos por la ciudadanía, todo lo cual se tradujo en una legitimidad creciente del sistema político.